Mandatos de la Relatora Especial sobre el derecho a la educación; del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; de la Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; y del Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos

REFERENCIA:
AL HND 7/2017

11 de agosto de 2017

Excelencia,

Tenemos el honor de dirigirnos a Usted en nuestra calidad de Relatora Especial sobre el derecho a la educación; Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; y Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de conformidad con las resoluciones 26/17, 34/18, 32/32 y 34/5 del Consejo de Derechos Humanos.

En este contexto, quisiéramos señalar a la atención del Gobierno de Su Excelencia la información que hemos recibido en relación con alegaciones sobre la criminalización de estudiantes universitarios participantes en manifestaciones públicas bajo los delitos de usurpación y privación de la libertad, así como sobre actos de intimidación y amenazas de uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de seguridad privada y de la Policía Nacional con el fin de dispersar manifestaciones estudiantiles pacíficas. Igualmente quisiéramos hacer del conocimiento de su Gobierno nuestra preocupación por las expresiones reiteradas de descalificación del trabajo del defensor de derechos humanos y sacerdote jesuita Ismael Moreno por parte de altos funcionarios universitarios y gubernamentales.

Una comunicación refiriendo hechos similares de uso excesivo de la fuerza en contra de miembros de la comunidad académica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en el contexto de manifestaciones públicas fue enviada al Gobierno de su Excelencia el 26 de abril de 2011 (caso HND 4/2011). Si bien agradecemos la respuesta de fecha 8 de Agosto de 2011, lamentamos que la misma se refirió únicamente a uno de los varios casos mencionados en la comunicación, sin hacer referencia al resto, ni al contexto general del uso de la fuerza por parte de elementos de seguridad en manifestaciones pacíficas.

Asimismo, una comunicación fue dirigida al Gobierno de su Excelencia el pasado 9 de mayo de 2017 en relación con alegaciones de amenazas e intimidaciones en contra del defensor de derechos humanos Ismael Moreno, en su calidad de director de la emisora Radio Progreso (caso HND 2/2017). Lamentamos que a la fecha esta oficina no ha recibido ninguna respuesta del Gobierno de su Excelencia.

Según la información recibida:

Los casos de Cesario Alejandro Padilla Figueroa, Moisés David Cáceres Velásquez y Sergio Luis Ulloa Rivera

Durante los meses de mayo y junio de 2016, grupos de estudiantes de la UNAH llevaron a cabo diversas protestas y tomas pacíficas orientadas a obtener la participación estudiantil en el Consejo Universitario, impulsar las reformas a las normas académicas universitarias vigentes y a manifestar rechazo a la criminalización de los estudiantes involucrados en las protestas. Dichas manifestaciones habrían terminado con la intervención de la fuerza pública y la presentación por parte de la Fiscalía de acusaciones penales en contra de 75 manifestantes por el delito de usurpación de bienes públicos.

El 20 de julio de 2016 autoridades de la UNAH y representantes del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) firmaron un acuerdo para extinguir la acción penal promovida en contra de 75 estudiantes universitarios y se comprometieron a instalar una mesa de diálogo para resolver el conflicto estudiantil. Sin embargo, esta medida sólo benefició a 72 de los imputados, quedando los estudiantes Cesario Alejandro Padilla Figueroa, Moisés David Cáceres Velásquez y Sergio Luis Ulloa Rivera sujetos a proceso penal.

El 7 de junio de 2017, el Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia declaró culpables a los Sres. Padilla Figueroa, Cáceres Velásquez y Ulloa Rivera por el delito de usurpación en contra de la UNAH. La audiencia para fijar la sanción correspondiente, originalmente agendada para el 28 de julio de 2017, ha sido aplazada dos veces y a la fecha no ha tenido lugar.

Los hechos del 24 de mayo de 2017

En la noche del 24 de mayo de 2017, 20 estudiantes miembros del MEU realizaron una toma pacífica del Edificio Administrativo de la UNAH en protesta por la continuación de los procesos penales seguidos en contra de los Sres. Padilla Figueroa, Cáceres Velásquez y Ulloa Rivera. Alrededor de 40 elementos de la compañía privada de seguridad contratada por la Universidad, presuntamente armados con toletes y gases lacrimógenos, se habrían reunido enfrente del Edificio, ordenando a los estudiantes a salir y amenazándolos con sacarlos por la fuerza.

Ante la negativa de los estudiantes a abandonar el inmueble, los elementos de seguridad habrían entrado al edificio por la fuerza y activado las alarmas de emergencia, ante lo cual los estudiantes utilizaron las mangueras antincendios para defenderse. Minutos más tarde habría llegado la Policía Nacional, cuyos elementos presuntamente amenazaron a los estudiantes atrincherados con armas de fuego. Ante ello, los estudiantes cedieron y fueron aprehendidos.

El 26 de mayo de 2017, 20 estudiantes involucrados en estos hechos habrían sido acusados de daños agravados en perjuicio de la UNAH estimados en 640,000 lempiras y privación de la libertad en perjuicio de guardias de seguridad de la Universidad. Posteriormente, el 21 de julio de 2017, 19 de los 20 estudiantes

involucrados habrían sido informados por los medios de comunicación de una suspensión por 5 años de la Universidad. Sin embargo, a la fecha no han sido notificados formalmente de ninguna decisión.

Los hechos del 16 de julio de 2017

El 16 de julio de 2017, estudiantes universitarios realizaron una toma pacífica del edificio de la Facultad de Bioquímica de la UNAH, en protesta por los procesos penales iniciados a raíz de los hechos del 24 de mayo de 2017. El edificio habría sido desalojado por medio del uso de la fuerza el mismo día, y seis de los involucrados habrían sido acusados ante la Fiscalía por los delitos de usurpación y privación de la libertad.

La descalificación del sacerdote Ismael Moreno

El 26 de julio de 2016, el sacerdote jesuita y defensor de derechos humanos Ismael Moreno, conocido también como “Padre Melo”, hizo un comentario crítico a las autoridades universitarias por medio de su página de Facebook. La Rectora de la UNAH reaccionó acusando al Padre Melo de ser un agitador, de buscar desestabilizar al país, y de promover ideas anarquistas entre los estudiantes. Asimismo, la UNAH dio por terminado el acuerdo de cooperación que mantenía con el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús, que encabeza el Padre Melo.

Expresamos nuestra preocupación ante las alegaciones de instrucción de procesos penales bajo los delitos de usurpación y privación de la libertad en contra de estudiantes universitarios participantes en manifestaciones pacíficas, así como ante las alegaciones de intimidación y amenazas de uso excesivo de la fuerza para dispersar manifestaciones estudiantiles pacíficas. Asimismo, expresamos nuestra preocupación ante la retórica de descalificación en contra de Ismael Moreno y de otros defensores de derechos humanos.

Estos hechos parecen contravenir lo establecido por los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Honduras el 25 de agosto de 1997, que establecen el derecho a la libertad de opinión y de expresión, así como el derecho a la libertad de reunión pacífica. Paralelamente, las alegaciones antes referidas parecen ser contrarias al artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por Honduras el 17 de febrero de 1981, que reconoce el derecho de toda persona a la educación.

En relación con las alegaciones arriba mencionadas, sírvase encontrar adjunto el **Anexo de referencias al derecho internacional de los derechos humanos** el cual resume los instrumentos y principios internacionales pertinentes.

Es nuestra responsabilidad, de acuerdo con los mandatos que nos han sido otorgados por el Consejo de Derechos Humanos, intentar clarificar las alegaciones

llevadas a nuestra atención. En este sentido, estaríamos muy agradecidos de tener su cooperación y sus observaciones sobre los asuntos siguientes:

1. Sírvanse proporcionar información y cualquier comentario que tenga sobre las alegaciones mencionadas.
2. Sírvase explicar la base legal de las sentencias por los delitos de usurpación y privación de la libertad en contra de los estudiantes Cesario Alejandro Padilla Figueroa, Moisés David Cáceres Velásquez y Sergio Luis Ulloa Rivera, así como de los procesos iniciados por los mismos delitos en contra de otros estudiantes universitarios, en relación con la toma de instalaciones públicas como forma de manifestación pacífica. En particular, sírvase explicar cómo dichas sentencias y procesos son compatibles con los artículos 19 y 21 del PIDCP.
3. Sírvase indicar si existen investigaciones en curso en relación con la actuación de elementos de la seguridad privada de la UNAH y de la Policía Nacional los días 24 de mayo y el 16 de julio de 2017, así como los resultados obtenidos hasta el momento, en caso de haberlos. Si no existe ninguna investigación abierta al respecto, sírvase explicar por qué.
4. Sírvase proporcionar información sobre las medidas adoptadas por el Gobierno de su Excelencia para resolver el conflicto en la UNAH por la vía del diálogo, asegurando la integridad de los defensores de derechos humanos que, como el sacerdote Ismael Moreno, trabajan para lograr este objetivo.

Agradeceríamos recibir una respuesta del Gobierno de Su Excelencia a estas preguntas en un plazo máximo de 60 días.

A la espera de su respuesta, quisiéramos instar al Gobierno de su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas. Quisiéramos asimismo instarle a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan.

Garantizamos que la respuesta del Gobierno de Su Excelencia será incluida en el informe que presentaremos al Consejo de Derechos Humanos.

Acepte, Excelencia, la expresión de nuestra más distinguida consideración.

Koumbou Boly Barry
Relatora Especial sobre el derecho a la educación

David Kaye
Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y
de expresión

Annalisa Ciampi
Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación

Michel Forst
Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos

Anexo

Referencias al derecho internacional de los derechos humanos

Sin pretender prejuzgar la veracidad de estas alegaciones o hacer una conclusión sobre los hechos, nos gustaría llamar la atención del Gobierno de su Excelencia sobre los estándares y normas internacionales relacionadas al caso. Quisiéramos referirnos en particular a los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Honduras el 25 de agosto de 1997, que establecen el derecho a la libertad de opinión y de expresión, así como el derecho a la libertad de reunión pacífica.

El artículo 19 exige que los Estados garanticen el libre ejercicio del derecho a la libertad de opinión y expresión, lo que implica no sólo el deber respeto directo por parte de todas las autoridades del Estado a dichas libertades, sino también la protección contra los actos de particulares o de entidades privadas que obstan a su disfrute (CCPR/C/GC/34, párr. 7). En este sentido, estimamos pertinente hacer referencia a la resolución 12/16 del Consejo de Derechos Humanos, la cual insta a los estados a garantizar el derecho a la libertad de expresión en virtud de ser un pilar fundamental de una sociedad democrática. La resolución subraya también la importancia del pleno respeto de la libertad de difundir información y la importancia del acceso a dicha información para la participación democrática, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. Asimismo, la resolución insta a los estados a que garanticen que las víctimas de violaciones al derecho a la libertad de expresión puedan interponer recursos eficaces para investigar efectivamente las amenazas y actos de violencia, así como los actos terroristas, dirigidos contra los periodistas, incluso en situaciones de conflicto armado, y llevar ante la justicia a los responsables de esos actos, para luchar contra la impunidad.

El artículo 21, por su parte, reconoce el derecho de reunión pacífica y establece que este sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

Al respecto, estimamos pertinente referirnos a la resolución 24/5 del Consejo de Derechos Humanos, cuyo texto “Recuerda a los Estados su obligación de respetar y proteger plenamente los derechos de todas las personas a la libertad de reunión pacífica y de asociación por cualquier vía, electrónica o no [...] y a que adopten todas las medidas necesarias para asegurar que cualquier restricción al libre ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación sea conforme con las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”. Asimismo, quisiéramos referirnos a la reciente adopción en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de la Resolución 25/38 sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas, cuyo texto reconoce que “las manifestaciones pacíficas pueden contribuir al pleno disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales” (A/HRC/25/38, párr. 12) y “[e]xhorta a los Estados a promover un entorno seguro y propicio para que los individuos y los grupos

puedan ejercer sus derechos a la libertad de reunión pacífica, de expresión y de asociación, velando además porque sus leyes y procedimientos nacionales relacionados con estos derechos se ajusten a sus obligaciones y compromisos internacionales en materia de derechos humanos, incluyan de forma clara y explícita un supuesto favorable al ejercicio de estos derechos, y se apliquen de forma efectiva” (A/HRC/25/38, Op. 3

También, quisiéramos hacer referencia a la recopilación de recomendaciones prácticas para la gestión adecuada de las asambleas (A / HRC / 31/66) elaboradas por el Relator Especial sobre el derecho de reunión pacífica y la libertad de asociación y el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, las cuales hacen hincapié en que "los Estados, así como sus fuerzas de seguridad y agentes del orden, están obligados, en virtud del derecho internacional, a respetar y proteger, sin discriminación alguna, los derechos de todas las personas que participan en reuniones, los observadores de estas y los transeúntes. El marco normativo que rige el empleo de la fuerza incluye los principios de legalidad, precaución, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas" (párr. 50). Siguiendo las recomendaciones, el uso de la fuerza por las fuerzas del orden público debería ser excepcional, y las asambleas deberían ser manejadas, de ordinario, sin recurrir a la fuerza. Cualquier uso de la fuerza debe cumplir con los principios de necesidad y proporcionalidad (párr.. 57). Estos principios se aplican a todo uso de la fuerza, incluida la fuerza potencialmente letal. Las armas de fuego sólo pueden ser utilizados contra una amenaza inminente ya sea para proteger la vida o para prevenir la prevención de lesiones que amenacen la vida (haciendo el uso de la fuerza proporcional). Además, no debe haber ninguna otra opción viable, como ser la captura o el uso de la fuerza no letal para hacer frente a la amenaza a la vida (haciendo el uso de la fuerza necesaria) (párr. 59). Por otra parte, las armas de fuego nunca deberían ser utilizadas solo para dispersar una reunión; el disparo indiscriminado contra una multitud es siempre ilegal (párr. 60).

Quisiéramos también hacer hincapié en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Honduras el 17 de febrero de 1981, que reconoce el derecho de toda persona a la educación, y que determina que ésta debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y de su dignidad, fortaleciendo el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Según este dispositivo, la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre. Quisiéramos adicionalmente recordar al Gobierno de su Excelencia que, como lo afirmó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General N°13, sólo se puede disfrutar del derecho a la educación si éste va acompañado de la libertad académica del cuerpo docente y de los alumnos. La libertad académica comprende la libertad del individuo para expresar libremente sus opiniones sobre la institución o el sistema (párrafos 38 y 39).

Quisiéramos por último llamar la atención del Gobierno de su Excelencia sobre las normas fundamentales enunciadas en la Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. En particular, quisiéramos referirnos a los artículos 1 y 2, que declaran que toda persona tiene derecho a promover y procurar la protección y realización de los

derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional y que cada Estado tiene la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

Además, quisiéramos referirnos al artículo 12, párrafos 2 y 3, de la Declaración, que estipula que el Estado garantizará la protección, por las autoridades competentes, de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración. A este respecto, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a una protección eficaz de las leyes nacionales al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades y actos, con inclusión de las omisiones, imputables a los Estados que causen violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como a actos de violencia perpetrados por grupos o particulares que afecten el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales.